

C.A. de Santiago

Santiago, trece de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo, además, presente:

Primero: Que, el Fisco de Chile se alza en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, que desestimó las excepciones invocadas por su parte, de haber sido ya reparados los perjuicios; haber operado en la especie la prescripción; por el monto asignado en la sentencia por concepto de daño moral y, por último, respecto de la forma de calcular los intereses.

Segundo: Que esta Corte comparte los argumentos de primera instancia para desestimar las excepciones opuestas. En efecto, no puede estimarse suficiente la reparación simbólica que ha hecho el Estado de Chile o los beneficios que otorga el Programa PRAIS, pues se trata de reparaciones generales que no logran reparar el daño particular y propio que sufren las víctimas de violaciones a los derechos humanos, actos que fueron cometidos por agentes del Estado y que solo puede determinarse en un juicio en el que puedan ponderarse las situaciones particulares de cada caso, de manera que procedía desechar la excepción de reparación opuesta.

Tercero: Que en cuanto a la excepción de prescripción, es un hecho pacífico que el derecho internacional consagra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los de lesa humanidad prohibiéndose por la Convención de Ginebra que las partes contratantes se exoneren a sí mismas de las responsabilidades incurridas a causa de tales hechos. Así tal como ha sostenido la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en diversos fallos *“no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental...”*. (Roles 20.288-2014; 22.856-2016 entre otras).

La legislación civil nacional que consagra la institución de la prescripción está referida a ilícitos comunes y jamás pensada para casos tan graves como lo son las violaciones a los derechos humanos, cuyo establecimiento se logra después de cambios político-gubernamentales y



que suelen durar muchísimas décadas como la experiencia nacional demuestra.

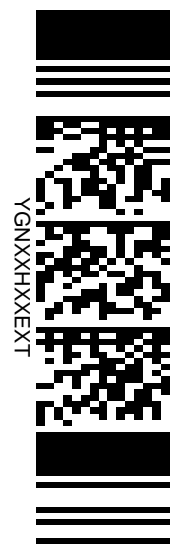
De esta manera, los preceptos legales que invoca el Fisco de Chile como fundamento de su solicitud no resultan atinentes al encontrarse en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que amparan el derecho de la víctima a recibir la reparación correspondiente, motivo por el cual acierta el tribunal de primera instancia al desestimar la prescripción extintiva invocada como alegación principal y la prescripción extintiva ordinaria deducida en subsidio.

Cuarto: Que, en cuanto al monto dinerario que se reguló por indemnización por daño moral, el Fisco señala que otorgar 80 millones para cada uno de los demandantes resulta excesivo.

Frente a ello, se debe señalar que la prueba aportada por los demandantes se encuentra considerada en los considerandos 15 a 20 de la sentencia de primera instancia, y que el Fisco de Chile no controvertió la calidad de víctimas de detenciones y torturas sufridas por los demandantes, ni la participación de los agentes del Estado en tales hechos, de manera que estando acreditada la calidad referida, acertadamente, la sentencia determinó que había que estarse a los hechos expresados en la demanda.

Quinto: Que, en este escenario, al encontrarse acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que la detención y tortura de cada una de las víctimas, que sin la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, por lo que sólo quedó por dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en esos hechos.

En consecuencia, tales daños no patrimoniales, deben ser acreditados, para lo cual se debe considerar, además, la prueba documental acompañada por los actores, en especial, la indicada en el motivo décimo sexto y décimo séptimo del fallo en alzada, la cual permite presumir en forma grave, precisa y concordante los daños padecidos por los actores, que no son solo físicos, sino, también, psicológicos, por lo que corresponde que sean compensados de forma adecuada y efectiva, ello para remediar las violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos que sufrió, que si bien no son cuantificables de manera pecuniaria, si puede establecerse conforme a la lesión de bienes valiosos, como son la vida, la integridad física y psíquica, la salud, el honor y sucede que, en este caso, se ha acreditado el



menoscabo y sufrimientos que han experimentado los demandantes en tales intereses y que justifican en definitiva que deban ser indemnizados.

Sexto: Que, sin embargo, esta Corte considera necesario efectuar una ponderación del monto conferido a título de indemnización del daño moral, respecto de cada uno de los demandantes, en atención a las circunstancias objetivas de los hechos descritos en la demanda y su posterior acreditación, tales como la edad que tenían al momento de su detención, su condición de salud, daño acreditado, y el tiempo que padecieron en estas situaciones, situaciones particulares que se encuentran contenidas en el motivo vigésimo del fallo en alzada, sin que el monto fijado por el sentenciador - que es idéntico para cada demandante- atendiera a cada caso en particular, de manera tal que deberá regularse y rebajarse prudencialmente su monto, para satisfacer adecuadamente los males y secuelas que fueran suficientemente acreditados y que fueron producto de los actos directos e inmediatos de agentes del estado, tal como se indicará en lo resolutivo.

Séptimo: Que, no se condena en costas al Fisco de Chile por haber tenido motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 144 y 186 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la sentencia de dos de agosto de dos mil veintitrés, dictada en la causa Rol C-12497-2020 seguida ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, por juicio ordinario, caratulado “Escobar con Fisco de Chile”, se declara:

I.- Se revoca la referida sentencia en aquella parte que condenó al Fisco al pago de las costas de la causa y en su lugar se declara que queda eximido de dicha carga procesal.

II.- Se confirma la sentencia apelada **con declaración**, que se reduce la indemnización de perjuicios por daño moral a los siguientes montos:

1°.- \$30.000.000 (treinta millones de pesos) para el demandante Patricio Leandro Torres Rivera;

2°.- \$20.000.000 (veinte millones de pesos) para el demandante Luis Cesar Fernández Zúñiga;

3°.- \$10.000.000 (diez millones de pesos) para la demandante Gloria María Palominos González;



4°.- \$20.000.000 (veinte millones de pesos) para el demandante José Jaime Fuentes Pavez;

5°.- \$25.000.000 (veinticinco millones de pesos) para el demandante Omar Pérez Santibáñez; y

6°.- \$30.000.000 (treinta millones de pesos) para el demandante Patricio Ángel Escobar Solorza.

Regístrese y en su oportunidad, devuélvase.

Redacción de la abogada integrante M. Fernanda Vásquez Palma

N°Civil-14731-2022.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes e integrada por la Ministra (S) señora Erika Villegas Pavlich y por la Abogada Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.



Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Jenny Book R., Ministra Suplente Erika Andrea Villegas P. y Abogada Integrante Maria Fernanda Vasquez P. Santiago, trece de septiembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a trece de septiembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

